



Roj: **STSJ PV 1191/2017 - ECLI: ES:TSJPV:2017:1191**

Id Cendoj: **48020330012017100119**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Bilbao**

Sección: **1**

Fecha: **02/03/2017**

Nº de Recurso: **443/2015**

Nº de Resolución: **95/2017**

Procedimiento: **Contencioso**

Ponente: **LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 443/2015

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SENTENCIA NUMERO 95/2017

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANÍA

MAGISTRADOS:

D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

D. JOSÉ DAMIÁN IRANZO CEREZO

En Bilbao, a dos de marzo de dos mil diecisiete.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 443/2015 y seguido por el procedimiento ordinario, en el que se impugna: ACUERDO 16-T/2015 DE 2-6-2015 DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA QUE RECHAZA EL REQUERIMIENTO PREVIO A LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO FORMULADO POR LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA CONTRA ORDEN FORAL 197-T/2015 DE 27-2-2015 POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS INTERURBANO POR CARRETERA DE LA COMARCA DE DEBAGOIENA Y CONEXIONES CON CAPITALES VASCAS (LUR DG-07) (CLAVE 6-MO-52/2014) A LA EMPRESA "TRANSPORTES PESA,S.A".

Son partes en dicho recurso:

- **DEMANDANTE** : AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA-LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA, representada y dirigida por los LETRADOS DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL GOBIERNO VASCO.

- **DEMANDADA** : DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, representado por la procuradora D^a. BEGOÑA URÍZAR ARANCIBIA y dirigida por el letrado D. ANTONIO IBARGUCHI OTERMIN.

- **OTRA DEMANDADA**: TRANSPORTES PESA, S.A, representada por la Procuradora DOÑA MARTA ARRUZA DOUEIL y dirigida por el Letrado DON FRANCISCO ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO.

Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANÍA.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- El día 28-7-2015 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que por los LETRADOS DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL GOBIERNO VASCO, actuando en nombre y representación de la AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA-LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA, se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Orden Foral 197-T/2015, de 17 de febrero, de la Diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa que adjudicó el contrato de concesión zonal del servicio público de transporte de viajeros interurbano por carretera de la comarca de Debagoiena (LUR DG-07) a la mercantil "**Transportes Pesa, S.A**", y contra el Acuerdo 16-T/2015, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno de la misma Diputación Foral que rechazó el requerimiento para la declaración de nulidad de la precitada Orden Foral; quedando registrado dicho recurso con el número 443/2015.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en él expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se estimen íntegramente sus pretensiones.

TERCERO .- En los escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal, por ambas demandadas, el dictado de una sentencia por la que se desestime la demanda en su totalidad y se le impongan las costas a la parte actora.

CUARTO.- Por Decreto de 20 de Mayo de 2016 se fijó como cuantía del presente recurso la de indeterminada.

QUINTO .- En los escritos de conclusiones las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.

SEXTO .- Por resolución de fecha 17 de Febrero de 2.017 se señaló el pasado día 23 de Febrero de 2.017 para la votación y fallo del presente recurso.

SÉPTIMO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se promueve en contra de la Orden Foral 197-T/2015, de 17 de febrero de la Diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa que adjudicó el contrato de concesión zonal del servicio público de transporte de viajeros interurbano por carretera de la comarca de *Debagoiena* (LUR DG-07) a la mercantil **Transportes Pesa, S.A**, y contra el Acuerdo 16-T/2015 de 2 de Junio del Consejo de Gobierno de la misma Diputación Foral que rechazó el requerimiento para la declaración de nulidad de la precitada Orden Foral.

La Autoridad Vasca de la Competencia, actuando en el proceso a través de los Servicios Jurídicos de la CAPV, ejercita sus pretensiones en este proceso con invocación de diversos preceptos de la legislación de contratos y de régimen procedimental común, citando como legitimante de su acción procesal el 3.4 de la LCAPV 1/2.012, de 2 de febrero, reguladora de dicho órgano de control del País Vasco, en el ejercicio de unas facultades a las que no se ha opuesto objeción de contrario.

Habrà de examinarse no obstante más adelante el *motivo de inadmisibilidad* que al amparo del artículo 69.b) LJCA la parte codemandada opone, -f. 165 a 170-, precisamente con fundamento en la falta de legitimación de la AVC para impugnar la adjudicación realizada en este caso.

Pero para la debida acotación del objeto evolutivo del litigio, se debe señalar que, en origen, la pretensión de que se anulase dicha adjudicación venia justificada en el escrito de demanda, -f. 59 a 79 de estos autos-, en la premisa de que la Administración demandada se habría servido del artículo 24.2 de la Ley vasca 4/2004, de 18 de Marzo, para prorrogar por largos períodos la concesión de servicios de transporte cuya vigencia, siempre según la AVC, debería haber finalizado el 31 de Julio de 2.012, cerrando el mercado a la competencia en contra de las disposiciones del reglamento CE 1370/2007, de 23 de Octubre, -arts 5.5 y 8, y a su régimen de aplicación transitoria por los Estados, y con la conclusión de que no se habría justificado aquella prórroga debidamente de cara al citado artículo 24.2 de la LCAE 4/2004 a partir de tal fecha hasta aprobarse el proyecto de nueva concesión el 29 de Julio de 2.014. Igualmente se ponía en cuestión el otorgamiento de concesiones zonales, sin suficiente justificación, frente a la regla de las concesiones lineales de acuerdo con dicha ley, y se sometían a crítica otras previsiones de los pliegos, -Fundamento Tercero-, antes de pasar a examinar los criterios de adjudicación de la Caratula y el PCAP. -F. J. Cuarto, folios 96 a 102-.

En el escrito de conclusiones sucintas -f. 723 a 739-, con alusión a haber recaído al respecto otra reciente Sentencia de 6 de Julio de 2.016, en el R.C-A nº 445/2015, el organismo autonómico demandante ha retirado los motivos del recurso expuestos en los referidos Fundamentos Primero, Segundo y Tercero de la demanda que concernían, respectivamente, a la prórroga de la concesión del servicio de transporte, a su carácter zonal y a las previsión del Pliego de modificación del contrato para incorporar nuevas prestaciones, limitando el contenido del proceso contencioso-administrativo al motivo desarrollado en el Fundamento Cuarto del mismo



escrito, en cuanto que este último concierne a la validez de la Orden Foral recurrida y no de los actos previos, no recurridos, como el Pliego de condiciones de la contratación.

En ese Fundamento Jurídico Cuarto del escrito de demanda se alegaba la vulneración del artículo 150.2 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de Noviembre, porque, si bien entre los criterios de adjudicación previstos en la Carátula y el PCAP se otorgaba mayor puntuación (máxima de 51 puntos) al del precio, único valorable con arreglo a fórmulas matemáticas, respecto a los criterios sujetos a juicios de valor (máximo de 49 puntos), en la aplicación de esos criterios de valoración de las ofertas presentadas por las cuatro licitadoras, ha resultado preponderante el segundo de los mencionados en cuanto que las diferencias en la puntuación del precio ofrecido han sido de tan solo 5,42 puntos entre la más alta y la más baja (50,41-44,99), mientras que en la puntuación de los criterios técnicos ha habido más de 15 puntos de diferencia entre la más alta y la más baja y más de 7 puntos de diferencia entre la primera y la segunda mejor puntuación (realmente no llegan a puntos entre 82,08 y 77,39, según el cuadro del folio 728), por lo que procedería la aplicación del artículo 150.2 y no el juicio de valor del Informe Técnico.

Asimismo, la recurrente adujo que el Informe Técnico de Valoración de los folios 487 a 546 del expediente, ofrece un amplísimo margen de apreciación al permitir una subponderación de los criterios. (Así, entre otros, el Plan de Explotación/organización hasta 16 puntos con máximo de 10 a la "Operativa del Servicio" y 6 puntos al "Plan de Organización, gestión..."). Semejantes críticas le merece la valoración del Plan de Organización, gestión y asignación de recursos humanos y medios materiales, -f. 735 a 737-. Igualmente se cuestiona que la Carátula y los Pliegos fijaran criterios valorativos genéricos, habiendo sido el propio Informe, y con falta de publicidad y transparencia, el que haya decidido como puntuar por cada criterio.

SEGUNDO.- Tanto la representación de la Administración demandada, -en adelante DFG-, como de la sociedad mercantil codemandada formulaban oposición que inicialmente venía referida a la impugnación de actuaciones que habían devenido firmes y consentidas, lo que no procede ya entrar a dirimir a la vista de la renuncia que la propia Administración recurrente hace de todos esos puntos y cuestiones litigiosas.

Así, zanjadas las cuestiones previas de procedimiento, el contenido residual del presente proceso se asimilaría al que han brindado otros procesos, como el R.C- A nº 446/2015, donde la misma Autoridad Vasca de la Competencia combatía otra de las adjudicaciones coetáneas de concesiones zonales de transporte (Comarca de Goierrialdea (LUR Z-04), y que ha daba lugar a nuestra Sentencia nº 548/2016, de 14 de diciembre de 2.016, en los siguientes términos.

"La demandada considera que esas alegaciones son extemporáneas porque conciernen a determinaciones del PCAP, que ha dado preponderancia a la valoración de la oferta económica con arreglo a las formulas previstas en ese documento respecto a los criterios de la propuesta técnica, sujetos a juicios de valor, de suerte que el mayor peso de los segundos en comparación con el primero, a resultas de las puntuaciones otorgadas a cada una de las ofertas, no es sino la consecuencia de la aplicación de lo previsto en los Pliegos no recurridos por la A.V.C..

Según esa misma parte, las puntuaciones asignadas por el órgano de valoración se han atendido a los siete criterios y subcriterios previstos y descritos en los Pliegos y en el Plan de explotación de la concesión zonal, sin extenderse a aspectos no contemplados en esos documentos; así y en lo que respecta al "Plan de explotación" el PCAP había previsto la distribución de los 16 puntos asignados a ese criterios a razón de 10 puntos a la operativa del servicio (nº de expediciones, mejoras horarias, etc.) y de 6 puntos al plan de organización, gestión y asignación de recursos humanos y medios materiales, señalando la cláusula 14 del PCAP la documentación técnica que debían presentar los licitadores para la ponderación del antedicho criterio y de los otros sujetos a juicios de valor.

(...) El artículo 150-2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprobó el texto refundido de la ley del contratos del sector público dispone:

"¿. En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto o restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos".



El precepto se refiere inequívocamente a la primera fase de la licitación, esto es, la de su convocatoria con arreglo a los pliegos de condiciones aprobados por la Administración contratante, no en vano los criterios de adjudicación del contrato, como las previsiones sobre la constitución del órgano de valoración o, en su caso, del comité de expertos o organismo especializado conciernen a los Pliegos rectores del procedimiento. Por lo tanto, no puede admitirse la división que hace la recurrente, en lo que atañe a la aplicación del precepto transcripto, entre determinaciones de los Pliegos y resultados de su aplicación en la fase de valoración de las ofertas.

El requisito de preponderancia de los criterios de adjudicación sujetos a fórmula respecto a otros criterios de adjudicación ha de cumplirse en los Pliegos en cuanto que a estos y solo a estos corresponde tal ponderación, con la consecuencia que de no cumplirse aquella regla ha de constituirse el comité de expertos a que se refiere el precepto.

Nótese que la tal comisión de expertos no puede constituirse "a resultas" de la valoración de las ofertas sino que, al menos, el procedimiento para su designación ha de venir establecido por los Pliegos (artículo 29 del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo) y el organismo técnico especializado que en el mismo supuesto, y en defecto del comité de expertos, debe valorar las ofertas debe identificarse en los pliegos; esto quiere decir, que el supuesto de encomienda de la valoración a uno u otro de los mencionados viene dado por la mayor preponderancia en los Pliegos de los criterios de adjudicación según juicios de valores que de los criterios de adjudicación sujetos a fórmulas.

Así, constituye un verdadero artificio argumental la aplicación de esa regla legal de ponderación "a posteriori", esto es, la comprobación de si ha cumplido la preponderancia atribuida por los Pliegos a la oferta económica, a la vista de las puntuaciones otorgadas a esa propuesta y a la técnica y de la comparación de sus respectivas diferencias.

El hecho de que en la valoración de las propuestas técnicas haya habido más diferencias que en la valoración de la oferta económica no atañe, en absoluto, a la regla de preponderancia del artículo 150-2 del TRLCSP, sino a las condiciones de las ofertas (la económica en las concesiones como la adjudicada por la Orden Foral recurrida, muy determinada por las contraprestaciones de la Administración) sus características y diferencias, y a la evaluación, acertada o no, del órgano competente.

En consecuencia, no puede convertirse una cuestión que concierne a las previsiones de los Pliegos sobre los criterios de adjudicación de las ofertas en una cuestión que atañe a la aplicación de esos criterios, sin haber recurrido antes los Pliegos ni discutido en el recurso interpuesto contra la resolución de adjudicación la conformidad de las valoraciones de las ofertas con los criterios establecidos por aquellos.

La recurrente no ha hecho ni lo uno ni lo otro, sino extrapolar a la fase de valoración de las propuestas, conocido su resultado, una regla de ponderación necesariamente previa a esa fase y, por consiguiente, no susceptible del desdoblamiento o prolongación que implican la interpretación que ha hecho aquella parte del artículo 150-2 del RDL 3/2011 al derivar a un momento del procedimiento de licitación lo que incumbe a un momento anterior.

(...) No se ha acreditado que el Informe de valoración de las propuestas técnicas hubiese introducido criterios de adjudicación distintos o complementarios de los previstos en los Pliegos, con sus respectivas ponderaciones, sino que la puntuación asignada a cada uno de esos criterios o características del objeto contractual sujetos a juicio de valor se ha ajustado a dichos criterios, siete en total, con las ponderaciones adecuadas a su estructura o composición que correspondía hacer al órgano de valoración en ejercicio de su discrecionalidad técnica.

Así es que dentro de los márgenes de esa discrecionalidad y en aras de la mejor motivación de sus evaluaciones lo que hizo el órgano competente fue establecer las pautas a las que debía acomodarse la aplicación de los criterios de adjudicación previstos a los Pliegos, atendida su propia estructura y definición, y por razones inherentes al mismo proceso de valoración.

En efecto, tratándose de elementos de las ofertas valorables con arreglo a juicios de valor y no mediante la aplicación de fórmulas, la sola descripción de los criterios de adjudicación en los Pliegos, por precisa que fuere, no permite su aplicación automática, sino que requiere de la función interpretativa del órgano de valoración, esto es, de la fijación de los parámetros o pautas que acordes a los criterios establecidos en los Pliegos han de servir para la aplicación o concreción de estos al momento de su puntuación.

En particular, y por lo que respecta a la valoración de la "operativa del servicio" (10 puntos, según el Pliego) lo que ha hecho el Informe de valoración fue ponderar la importancia de cada línea en función de su cuota (%) de participación en el kilometraje de todas las líneas, y según los porcentajes (30% y 70%) asignados, respectivamente, a determinados factores objetivos y adecuados a las implicaciones de aquel criterio; y lo



mismo cabe decir respecto a las ponderaciones referidas al "*plan de organización, gestión y asignación de recurso humanos y medios materiales*".

La recurrente, en fin, no ha dado ninguna razón más allá de disquisiciones teóricas, que denoten la extralimitación del mencionado Informe en la ponderación derivada o aplicativa que corresponde al órgano de valoración en la interpretación y aplicación de los criterios establecidos por el Pliego, además de que no puede reprocharse a ese órgano la generalidad o imprecisión de la que, en su caso, adolezcan las determinaciones de los Pliegos.

A la misma conclusión se llega si atendemos a la documentación y contenido de las proposiciones técnicas establecidos por el artículo 14 del PCAP y, por lo tanto, a la adecuación de las puntuaciones a los distintos aspectos de esas proposiciones contemplados en los Pliegos.

En conclusión, el órgano de valoración no ha innovado los elementos o características de las proposiciones técnicas establecidos por los Pliegos a los que debían contraerse sus juicios de valor y tampoco se ha apartado de las ponderaciones fijadas en los Pliegos, sino que los ha interpretado y aplicado con arreglo a unas pautas preestablecidas, iguales para todos los interesados, y que por no tener más alcance que el de servir a la aplicación particularmente motivada de los criterios de adjudicación fijados por los Pliegos no requería de su publicidad anterior a la apertura del sobre 2, en garantía de los principios de transparencia, igualdad y libre competencia invocados por la recurrente con alusión a los artículos 14 de la CE, 1 y 32 del RDL 3/2001, y no a los preceptos de la legislación de defensa de la competencia que legitima la actuación de la A.V.C., con lo cual tampoco podemos apreciar en qué medida la actuación del órgano de valoración ha vulnerado esa legislación."

No obstante, en el presente caso, la congruencia requiere examinar un planteamiento de inadmisión que fue formulado en la contestación de la mercantil adjudicataria codemandada, -f. 165 a 170, del Tomo I-, en que dicha parte, con diferentes citas, rechazó que la AVT se encontrase legitimada, al faltar una relación directa y específica con el objeto litigioso -y no cualquier vínculo con la materia-, lo que en el caso de la Administración institucional, y a diferencia de la territorial o general, requeriría una legitimación especial ejercitable frente a solo aquellas decisiones que afectasen de modo real y efectivo a *los fines* atribuidos a la entidad pública, de acuerdo con la fórmula del artículo 19.1.g) LJCA, lo que, pudiendo ocurrir en estos casos respecto del diseño del procedimiento de contratación o las reglas de la concesión, no ocurre en modo alguno respecto del acto de adjudicación a uno u otro licitador en que finalmente desemboca el proceso, cuya suerte le es completamente indiferente a dicha Autoridad de la Competencia.

La Sala, en el ámbito limitado al que la controversia finalmente se reduce, va a acoger tal planteamiento en función de las siguientes consideraciones.

En primer término, el enclave de esa legitimación se sitúa en el artículo 19.1.d) LJCA, (o en su caso, g) siempre en la medida en que el País Vasco ostenta, de acuerdo con la propia E. de M. de dicha ley vasca, la competencia sobre "*comercio interior*" que le reconoce el artículo 10.27 del EAPV y que le dota de competencia ejecutiva en materia de libre competencia dentro del ámbito intracomunitario y territorial autonómico, a cuyo objeto el aludido artículo 3.4 le atribuye a la AVC esa legitimación procesal para impugnar, entre otros, los actos y disposiciones emanadas del poder público foral *de que se deriven obstáculos al mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados*. Es corolario de todo ello, que la referida autoridad no aparecería legitimada para impugnar actos o disposiciones de las instituciones forales del País Vasco que puedan ser susceptibles de incurrir en otras infracciones del ordenamiento jurídico en sentido amplio, siempre que no se destaque el enlace directo con esos obstáculos a la competencia. Carecerá en suma dicha institución de una legitimación abstracta para la defensa de la legalidad en materia contractual administrativa, ni, lo que es más y debe subrayarse, tampoco cuenta con una potestad de tutela o supervisión general en dicha materia que le sitúe en posición de supremacía sobre tales Administraciones en orden a fiscalizar su total actividad en materia de concesiones de transporte público.

En una primera vertiente, tal y como acepta la parte demandada que opone la inadmisibilidad, nada podría objetarse a que a través del requerimiento empleado a la Administración activa de transportes terrestres, la AVC intentase hacer valer la competencia efectiva en materia de plazos o modalidades de concesión, y puede invocarse al respecto, en torno a materia afín, la reciente STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3ª) de 14 de marzo de 2016 (ROJ: STS 1067/2016) en Recurso nº 3718/2012, a su vez, enlazada con otras.

Sin embargo, hemos de coincidir en que, circunscrita en este supuesto la revisión jurisdiccional al modo en que los licitadores han sido valorados -y siempre dentro de un marco de legitimación limitada como es el de la contratación administrativa-, llevaría a consecuencias extravagantes que la autoridad de la competencia de uno y otro nivel tratase de hacer valer el núcleo genérico de la legalidad contractual en favor de una u otra resolución de la adjudicación y también, por hipótesis no descartable, determinando el sujeto adjudicatario en una peculiar manifestación de la postulación "*pro alio*", que, faltando esa conexión explícita y racionalmente



expuesta entre valoración y reglas de la competencia cuya preservación incumbe promover a dicha autoridad, redundaría en la mera aspiración a la legalidad que el ordenamiento administrativo no acoge.

TERCERO.- Procediendo por ello la inadmisión del presente recurso, resulta preceptiva la imposición de costas, de conformidad con el artículo 139.1 LJCA .

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, la Sala, (Sección Primera) emite el siguiente;

FALLO

Declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco en representación de la Autoridad Vasca de la Competencia contra la Orden Foral 197-T/2015, de 17 de febrero de la Diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa que adjudicó el contrato de concesión zonal del servicio público de transporte de viajeros interurbano por carretera de la comarca de *Debagoiena* (LUR DG-07) a la mercantil *Trasnsportes Pesa, S.A.*, y contra el Acuerdo 16-T/2015 de 2 de Junio del Consejo de Gobierno de la misma Diputación Foral que rechazó el requerimiento para la declaración de nulidad de la precitada Orden Foral, con imposición de costas a la recurrente.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer **RECURSO DE CASACIÓN** ante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo, el cual, en su caso, se preparará ante esta Sala en el plazo de **TREINTA DÍAS** (artículo 89.1 LJCA), contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito en el que se dé cumplimiento a los requisitos del artículo 89.2, con remisión a los criterios orientativos recogidos en el apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, publicado en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016.

Quien pretenda preparar el recurso de casación deberá previamente consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el Banco Santander, con nº 4697 0000 93 0443 15, un **depósito de 50 euros** , debiendo indicar en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso".

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos de constituir el depósito (DA 15ª LOPJ).

Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el Letrado de la Administración de Justicia doy fe en Bilbao, a 2 de marzo de 2017.